

Crónica de una infamia

A iniciativa del senador Ricardo Monreal Avila, el 22 de mayo de 2012 se planteó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes a la búsqueda de justicia para una exfuncionaria de la Secretaría de Hacienda “presa de una cacería inhumana a manos de diversos servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal y Judicial”, desde hacia una década. La primera llamada del asunto la había colocado en la mesa del órgano legislativo la senadora priista, Yolanda Eugenia González Hernández, el 25 de noviembre de 2004.

Los reclamos hasta hoy han resultado estériles, pese al calificativo de persecución de Estado y de sostenerse con documentos los cargos. El calvario de la doctora en derecho Lilia Cortés García, directora de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Egresos, nace cuando es despedida por negarse a avalar una “reasignación” de 750 mil millones de pesos del presupuesto federal hacia ramos distintos a los autorizados por la Cámara de Diputados.

Y aunque logró ganar un juicio laboral bajo el expediente 1418/02, la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, ésta no ha sido cumplida hasta hoy por diferentes argucias legaloides. Entre ellas está la colocación de un amparo por parte de la dependencia, con la novedad de que el promovente, Jaime Loe Rangel, actualmente desaparecido, se amparaba con una cédula profesional que correspondía a una mujer, contadora pública, por cierto...

López quien tenía una relación estrecha con Cecilia Barra Gómez Ortigoza, justo la funcionaria de Hacienda que ordenó el despido, quien luego sería Oficial Mayor de la Procuraduría General de la República. En el marco, Lilia Cortés García fue objeto de persecución y vejaciones sin fin por parte de agentes de la Procuraduría General de la República, provocándole 12 contusiones severas, cinco descalabradas, 22 “levantones”, tortura al calce, apuntándole con armas de fuego, lo que provocó varios ingresos a hospitales con politraumatismos.

En siete de las 22 agresiones físicas sufridas la doctora en derecho quedó inconsciente. En la catarata de agresiones la subieron a la azotea de edificios solos o utilizados como bodega, colgándola de un brazo o de una pierna. De todo hay constancias.

Del otro lado de la moneda, la Auditoría Superior de la Federación corroboró las transferencias y modificaciones al presupuesto en 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, es decir el sexenio de Vicente Fox, cuyas cuentas públicas no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. El expediente de Cortés ha pasado de noche por el escritorio de los secretarios de Hacienda del propio Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Una oportunidad de oro para que el actual demuestre que se rompió con el pasado, en el marco de una infamia

Balance general. Colocada en paréntesis una investigación sobre una presunta simulación para acaparar contratos de suministro de medidores, vía la creación de una empresa alterna encabezada por uno de los cuñados del dueño de IUSA, Carlos Peralta, pudo participar en una nueva licitación convocada por la Comisión Federal de Electricidad. En la competencia están cuatro compañías en lo individual, incluida IUSA, además de dos consorcios. Estamos hablando de Controles y Medidores Especializados, Electromotor de las Américas y BP Energía Sustentable. Las empresas integradas en una son Protecsa Ingeniería, Protecsa Automation, Insourcing Professional Services y AS Systems, además de Planeación y Análisis de Tecnología.

COLUMNA DE ENRIQUE CAMPOS SUAREZ. Junio 13 del 2019

En la 4T, la voz perdida de los empresarios

A Texcoco no se le mueve ni un pelo y al aeropuerto de Santa Lucía no le pueden entrar los empresarios, pero por favor crean e inviertan en México de la mano de la 4T. Este mensaje contradictorio del jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, retrata el mundo paralelo en el que vive el gobierno federal. La cancelación del aeropuerto de Texcoco acabó, no sólo con una obra avanzada a 40%, sino con la confianza empresarial que no puede tener certezas de la racionalidad de las decisiones de gobierno. La construcción de Santa Lucía está suspendida por el poder judicial, tiene la clara oposición de la autoridad ambiental, y a pesar de ello la presume el señor Romo. Esquizofrénico.

El ejemplo más claro de esa divergencia en la percepción de las cosas se puede ver en los pronósticos económicos. Los analistas que consulta el Banco de México no prevén un crecimiento durante este sexenio más allá de 2% en promedio, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en 4% en promedio y 6% de cierre triunfal de su sexenio. Y a pesar de la certeza que tienen muchos empresarios de que las cosas no van bien y a pesar de la plena convicción que hay entre los sectores productivos de la necesidad de acciones gubernamentales para cambiar la trayectoria económica, les faltan voces a esos empresarios que se atreven a decirlo con claridad.

El Consejo Coordinador Empresarial, que nació como la necesaria voz opositora ante las arbitrariedades populistas de Luis Echeverría, ha perdido toda posición crítica ante el gobierno y se ha anexado a la nómina moral de la 4T. Y no hay empacho para que ambas partes, CCE y gobierno, se reconozcan como incondicionales aliados. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una bendición que Carlos Salazar Lomelín haya llegado a la presidencia de ese organismo cúpula del sector privado. Mientras que el dirigente empresarial se estrenó en el cargo adelantando que lo que buscaba era ayudar al presidente.

No deben las organizaciones empresariales asumirse como opositores, pero tampoco como aplaudidores, de los gobiernos. Su responsabilidad está con sus

agremiados y, por lo tanto, la voz que deben alzar es la que represente los intereses de esos grupos de empresarios. Incluso, desde el Consejo Mexicano de Negocios, que agrupa a casi una veintena de las más influyentes y grandes empresas del país, ven con recelo la falta de firmeza del organismo que estatutariamente está por arriba de ellos: el CCE. Pero tampoco levantan la voz.

Hay algunos dirigentes empresariales que parecen claramente opositores al régimen actual, como el caso del presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, quien es crítico y puntual en sus señalamientos, pero se le nota mucho la vena opositora. La voz empresarial de desacuerdo con las políticas aplicadas, con los resultados obtenidos, no se puede apagar ante los temores de represalias.

No por el miedo de ser incluidos en la lista mañanera de las descalificaciones a los conservadores, mafiosos del poder y neoliberales del viejo régimen, deben dejar de señalar lo que afecte sus legítimos intereses como hombres y mujeres de negocios. Por lo pronto, la voz crítica de los empresarios que sabían exigir lo que les toca tiene apenas uno que otro destello. Muchos evitan meterse en problemas con la 4T y los que sí deslumbran son los aplaudidores con agendas políticas personalísimas. ¡Lástima!